La necesidad de una política económica para los mexicanos.*

Carlos Heredia Zubieta**

El día de hoy los presidentes George W. Bush y Vicente Fox están reunidos en el rancho de éste último en Guanajuato para discutir el camino que seguirá la relación bilateral entre los Estados Unidos y México. Después de que durante años el establishment estadounidense apoyó la permanencia del régimen surgido en 1929, con la derrota del PRI en las históricas elecciones del 2 de julio de 2000, numerosos observadores estadounidenses celebraron esta importantísima ruptura política, pero insistieron en que no se debía modificar la política económica. Más allá de la falta de legitimidad del actual gobierno estadounidense para hablar de democracia, la verdad es que además de su prolongado apoyo al autoritarismo político mexicano, sucesivas administraciones demócratas y republicanas en Washington tienen una marcada responsabilidad en la polarización que la economía mexicana ha experimentado desde 1982, con la puesta en práctica del paquete de políticas de ajuste estructural impulsadas por el Tesoro estadounidense.

Es cierto que la alternancia en la Presidencia de la República ha traído consigo o consolidado un clima de libertades políticas. Sin embargo, no se han planteado cambios en la política económica no cambió, y a juzgar por la composición del gabinete económico del Presidente Fox y por sus primeras medidas, podemos plantear la hipótesis de que su administración le apostará a la continuidad de la estrategia económica instrumentada en México en los últimos 20 años, con el argumento de que sólo hay de una sopa y que ésta es la sopa de la estrategia económica neoliberal, del paquete de ajuste estructural.

Entonces, ¿qué política económica necesitamos los mexicanos hoy? Si rechazamos la estrategia instrumentada en nuestro país durante los últimos tres sexenios por su impacto negativo en la planta productiva nacional y en el tejido

CASA MÉXICO 1997 — 2001. ANEXOS DEL INFORME FINAL.

social, es nuestra responsabilidad contribuir a la construcción de alternativas económicas para México y los mexicanos. A ello apuntan estas líneas.

La llamada "modernización" de la economía mexicana a partir de 1982 ha seguido los lineamientos del llamado Consenso de Washington y del paquete de ajuste estructural cuyas características principales son:

1. El libre comercio;
2. El libre movimiento de capitales;
3. La búsqueda de la estabilidad monetaria y la baja inflación a cualquier costo;
4. El conservadurismo fiscal y la privatización de las empresas estatales;
5. La flexibilidad laboral: el nulo poder de negociación de los asalariados.

La gran paradoja es que estas políticas no tienen nada de modernas. Este modelo no tiene por objetivo ni el crecimiento económico, ni el fortalecimiento del empleo, ni la distribución equitativa del ingreso, sino que supone que éstos se darán de forma automática si se llevan a la práctica los lineamientos enunciados. En México ha sucedido todo lo contrario. Hoy tenemos una economía extremadamente polarizada entre un pequeño puñado de personas que pertenecen a la lista de billonarios de Forbes, y el 80% de los hogares cuyo ingreso familiar mensual no alcanza los 500 dólares. Más grave aún, tenemos una economía cuya evolución depende crecientemente de decisiones tomadas fuera de México para satisfacer intereses externos.

En un artículo publicado titulado "*Mexico's US Problem*" o *El problema estadounidense de México*", publicado en la revista *The Nation*, el congresista californiano Bob Filner plantea que durante los últimos 25 años Estados Unidos ha tenido una profunda y a menudo decisiva influencia en las políticas económicas y sociales de México, de manera que en buena medida el nivel actual de emigración de México hacia Estados Unidos es el resultado de políticas diseñadas y promovidas por las corporaciones, el gobierno y las instituciones financieras estadounidenses. De hecho, Filner, profesor de historia en la Universidad Estatal de

CASA MÉXICO 1997 — 2001. ANEXOS DEL INFORME FINAL.

San Diego durante veinte años, señala acertadamente que a la par de la instrumentación del programa de ajuste estructural a partir de 1982, la drástica caída en la inversión pública en infraestructura, en educación y en salud, provocó el desplome de los niveles de vida y el decremento en el ritmo de generación de nuevos empleos. Ello creó las condiciones que estimularon una gran oleada de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos, que de manera simultánea se sintieron expulsados por el deterioro de las condiciones sociales en México y atraídos por los muy superiores niveles salariales al norte del Río Bravo. Adicionalmente, se suponía que el Tratado de Libre Comercio detendría esto, pero la migración continuó porque se prolongó el deterioro social en México y la brecha salarial incluso se agrandó. Lejos de arraigar a los trabajadores mexicanos en su tierra, el TLC provocó un incremento neto en la migración hacia el norte.

¿Qué hacer entonces? Es falso que no se pueda tomar otro camino. En primer lugar, porque no se ha entendido que el principal problema de la economía mexicana es la exclusión de la mayor parte de la población de la posibilidad de obtener un ingreso monetario, así como la insuficiencia de ingresos de los asalariados. Entre las medidas que estamos reclamando numerosos ciudadanos mexicanos que cuestionamos la estrategia económica seguida desde 1982 están:

- a) Otorgar al gasto público un papel dinámico en la creación de oportunidades de empleo y de inversión;
- b) Establecer topes a las tasas de interés para reducir en términos reales el endeudamiento de la sociedad;
- c) Restringir el poder de los monopolios y estimular la competencia económica;
- d) Instrumentar una política fiscal basada en la progresividad del impuesto sobre la renta y en la eliminación de regímenes especiales de tributación para sectores privilegiados;
- e) Limitar la inversión extranjera directa en sectores estratégicos como el energético;

CASA MÉXICO 1997 — 2001. ANEXOS DEL INFORME FINAL.

f) Desarrollar industrias de alto valor agregado nacional, fomentando el crecimiento del mercado interno.

Necesitamos, pues, políticas monetarias y fiscales que permitan dar un impulso a la actividad productiva y mejorar el cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado. Precisamos, también, de una política salarial en que se compartan de forma automática los incrementos de la productividad entre capital y trabajo, de tal manera que se propiciara el crecimiento del mercado interno. El reto, entonces, es encontrar las políticas que maximicen la creación de riqueza en México, de manera que, lejos de transferirla al extranjero, beneficie a los mexicanos de forma equitativa.

Las políticas enunciadas párrafos atrás garantizarían un crecimiento sostenido de la economía mexicana, cuyos beneficios se distribuirían de manera mucho más horizontal que con las políticas actuales. Sin embargo, estas políticas de orientación nacional son rechazadas *a priori* por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por sus vigías, las instituciones financieras internacionales, que insisten una y otra vez en que los países del sur adopten políticas que benefician a los propietarios internacionales del capital financiero y de la tecnología, en perjuicio de aquéllos que sólo cuentan con sus recursos naturales y su fuerza de trabajo. Así, los grandes beneficiarios de la globalización son los accionistas de las multinacionales y el capital financiero, que controlan la propiedad intelectual, que tienen acceso al capital barato y que gozan de una posición ventajosa en el mercado, lo que les ha permitido aumentar su poder de negociación frente a asalariados y gobiernos en forma dramática.

Pero aquí se trata de encontrar soluciones. El mensaje que la Evaluación Ciudadana del Ajuste Estructural llevado a cabo en México nos da es el mismo que miles y miles de manifestantes han dejado en claro en Davos, en Seattle, en Washington, en Bangkok, en Porto Alegre, y próximamente en Cancún: para que tenga sentido, la política económica tiene que beneficiar a la gente, al pueblo, a la

CASA MÉXICO 1997 — 2001. ANEXOS DEL INFORME FINAL.

gran mayoría de los ciudadanos de un país, y no sólo a los grandes corporaciones. Se tiene que construir desde y con los productores locales, las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, los campesinos, incorporando mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Como lo ha señalado Lorenzo Meyer, el primer gobierno del nuevo régimen apenas se está iniciando, pero ya debe empezar a dar muestras efectivas de que el 2 de julio no fue un mero cambio de formas. La mera continuidad de las políticas heredadas del antiguo régimen sólo traerá consigo la profundización de la desigualdad y socavará el avance democrático logrado a tan alto costo. No lo permitamos; impulsemos una verdadera democratización de la economía mexicana.

* Intervención en el II Foro Nacional de presentación y discusión de resultados de la Evaluación Ciudadana del Ajuste Estructural "20 años de políticas económicas en México", organizado por el Comité Coordinador de CASA-México y la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República en la Cd. de México, 15-16 de febrero de 2001. Este texto se ha beneficiado de los muy valiosos comentarios de Adolfo Hellmund López.

** Economista, Socio de Equipo PUEBLO, A.C.